



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
**AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD**

**Informe Firma Conjunta Transferible**

**Número:**

**Referencia:** Sentencia; EX-2022-132549491- -APN-SGASAD#TFN; “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACIÓN”.-

---

**TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN**

En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, los Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Juan M. Soria, a fin de resolver en los autos caratulados “**ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACIÓN**”, expediente n.º **EX-2022-132549491- -APN-SGASAD#TFN**.

**El Dr. González Palazzo dijo:**

**I.—** Que, mediante RE-2022-132548979-APN-SGASAD#TFN, se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución n.º 3785/2018 (DE PRLA), recaída en el expediente administrativo SIGEA n.º 12197-3448-2011, por la cual se le formuló un cargo en concepto de tributos adeudados y se dispuso archivar las actuaciones en los términos de la Instrucción General n.º 9/17 (DGA) en su carácter de garante mediante la Póliza n.º 964.591 de la operación de importación temporaria n.º 07 001 IT16 001377 J por la supuesta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero. Se refiere a los antecedentes del sumario contencioso. Plantea la nulidad de la resolución aduanera puesto que el servicio aduanero omitió notificar a su mandante de la corrida de vista, vulnerando así su derecho de defensa. En subsidio, realiza consideraciones respecto del carácter accesorio de la obligación contraída por la aseguradora y limita su responsabilidad al monto asegurado mediante la Póliza n.º 964.591. A su vez, se pronuncia sobre la exigencia tributaria y la tasa de interés resarcitorio en dólares. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco.

**II.—** Que, mediante IF-2023-43481665-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal, contesta el

traslado que le fue conferido y ofrece las actuaciones administrativas correspondientes a la causa las cuales acompaña en fecha 19/04/2023 en formato digital. Formula una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la contraria. Se refiere a los hechos y antecedentes de la causa. Realiza consideraciones respecto de la obligación de la aseguradora y de los planteos realizados por la contraria sobre la nulidad de la resolución. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas a la demandante.

**III.—** Que, en fecha 14/03/2024, se declaró de previo y especial pronunciamiento la excepción de nulidad planteada por la actora en su escrito de apelación y se elevaron los autos al conocimiento e intervención de la Sala “F”.

Que, en fecha 28/06/2024, los autos quedaron en estado de dictar sentencia.

**IV.—** Que, en fecha 19/04/2023, la representación fiscal acompañó las actuaciones administrativas SIGEA n.º 12197-3448-2011 en formato digital, en un archivo PDF de un total de 80 páginas, cuyo trámite culminó con el dictado de la Resolución n.º 3785/2018 (DE PRLA), aquí apelada.

**V.—** Que, sentado lo precedente, corresponde a este Tribunal resolver el planteo de nulidad incoado por la actora en su escrito de presentación liminar.

Que, conforme se verifica de su lectura, las actuaciones principiaron con el Acta de Denuncia n.º 1607/2011 labrada por el servicio aduanero contra la firma importadora DOMINGO A. CAPRIA S.A. por la supuesta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero con relación a la Destinación de Importación Temporal n.º 07 001 IT16 001377 J, cuyo vencimiento operó el día 24/11/2008, por no haber acreditado la reexportación de la mercadería.

En consecuencia, a fs. 20 de las actuaciones, en fecha 24/06/2013 se dispuso la instrucción del sumario contencioso en los términos del art. 1090, inc. “c)” del Código Aduanero.

Finalmente, en fecha 11/06/2018, se dictó la Resolución n.º 3785/2018 (DE PRLA), objeto de la controversia suscitada en autos, por la cual se resolvió archivar sin más trámite las actuaciones en los términos del punto D.4 de la Instrucción General n.º 9/17 y formular cargo en concepto de tributos adeudados por la suma de U\$S 3.222,37 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS) y \$6.754,17 (PESOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON DIECISIETE CENTAVOS) contra la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. en su carácter de garante de la operación mediante la Póliza n.º 964.591.

Que, conforme surge de la lectura de las actuaciones, previo al dictado de la resolución definitiva, el administrador omitió dar cumplimiento a la carga impuesta por el art. 1101 del Código Aduanero al no correr vista de todo lo actuado a la supuesta infractora.

Cabe recordar que el mencionado artículo establece que: *“cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba*

*y acompañen la documental que estuviere en su poder (...)”.*

En consecuencia, todos los actos procesales cumplidos en forma posterior se hicieron sin intervención alguna de la imputada y su garante, quienes, frente a tal omisión procesal, no tuvieron oportunidad alguna de ejercer su legítimo e incólume derecho de defensa, como también acompañar o, en su caso, identificar, la documentación que considerase útil para que sea agregada a la pesquisa.

Es más, el único momento en el cual la firma aseguradora tomó conocimiento de lo actuado fue al cursársele la notificación a efectos de hacerle saber el dictado de la Resolución n.º 3785/2018 (DE PRLA), apelada en autos, sin que antes se la citara para esgrimir las defensas que estimase pertinente, ello, en franca violación a lo normado por el art. 1101 del C.A. —previamente citado—.

No cabe duda de que la demandada no ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos por la normativa aduanera en lo que al procedimiento previsto para las infracciones respecta (arts. 1080 y 1117 del Código Aduanero), dentro del cual figura la corrida de vista a la imputada y su fehacientemente puesta en conocimiento. Se advierte, entonces, que se configuró una afectación, no solo al derecho de defensa de la actora, sino también a los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso (ver al respecto la Exposición de Motivos del Código Aduanero, Título I, Capítulo Primero, “Disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero”).

En consecuencia, la omisión en la que incurrió el servicio aduanero al no disponer la corrida de vista desnaturaliza el procedimiento infraccional previsto por el Legislador. Vicio que, como tal, no puede considerarse saneado ulteriormente con la notificación de la resolución apelada.

Conforme ello, cabe concluir que dicha conducta omisiva —lesiva del derecho fundamental de defensa en juicio— torna nulo, por aplicación de la consabida teoría del fruto del árbol envenenado, el acto administrativo corolario del procedimiento infraccional, la Resolución n.º 3785/2018 (DE PRLA) en tanto adolece de sustento legal y fáctico que validen su necesaria motivación.

**V.—** Que, sin perjuicio de lo sentado precedentemente —y que bastaría para dar respuesta jurisdiccional al caso traído a debate—, estimo menester desarrollar algunas consideraciones respecto de la Instrucción General en trato, en tanto el artículo 1º del resolutorio aquí apelado, se decidió “ARCHIVAR sin más trámite las presentes actuaciones en los términos de la Instrucción General N° 9/17 (DGA)”.

La citada instrucción tuvo su origen en la IG n.º 01/98, reformulada por la IG n.º 02/07 y su ampliatoria, la IG n.º 02/08. Estas tuvieron como finalidad evitar el dispendio innecesario de recursos materiales y humanos de la Administración Pública, disponiendo en ese sentido el archivo de aquellas actuaciones que importaran la posible aplicación de las sanciones previstas para las infracciones aduaneras, cuyos bajos montos tornaran antieconómico implementar o continuar medidas tendientes a lograr su cobro.

Cabe aclarar que, no obstante la finalidad perseguida por la IG n.º 9/17, al tratarse de la investigación de un ilícito, previo a disponer su archivo en base al monto por el que hubiese prosperado la sanción, correspondía en primer término determinar en forma fehaciente si se había configurado o no la infracción imputada en autos, la que, en caso de acreditarse, recién ahí daría lugar a la aplicación de la pretendida multa y de los tributos que ahora se pretenden exigir a la firma.

He aquí un procedimiento que comenzó siendo de naturaleza infraccional, pero que culminó con el archivo de las actuaciones y la formulación de un cargo por tributos adeudados, en tanto se dan los presupuestos fácticos de la Instrucción General: que el hecho reprochado como ilícito conlleve la imposición de una multa que resulte inferior a los \$30.000—llámese “multa mínima”—, a más de verificarse la inexistencia de antecedentes computables a la importadora.

Claramente, la exigencia tributaria implica una presunción —amén de la suerte de que corra físicamente la pretensión punitiva por conveniencia funcional— y, sobre ella, el servicio aduanero da por hecho el incumplimiento al régimen de importación temporaria según lo previsto en el art. 274 del Código Aduanero. Que, esa presunción, en este caso en particular, carece de la contracara que pudiese desvirtuarla pues, simple y fatídicamente, el Fisco omitió dar espacio para que las partes pudiesen defenderse al no disponer en tiempo y forma la corrida de vista.

En este orden de ideas y teniendo en consideración los extremos señalados ut supra en cuanto al procedimiento llevado a cabo ante la administración, corresponde declarar la nulidad de la Resolución n.º 3785/2018 (DE PRLA), recaída en el expediente administrativo SIGEA n.º 12197-3448-2011, con relación a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.

**VI.—** Que, resuelto lo expuesto precedentemente, incumbe ahora analizar el planteo de prescripción esgrimido por la recurrente.

Que, tal como fue mencionado, las actuaciones administrativas iniciaron por la denuncia realizada por el servicio aduanero por la presunta infracción al art. 970 del Código Aduanero, con relación a la destinación n.º 09 001 IT14 000838 K, cuyo vencimiento operó con fecha 24/11/2008.

Que, la apertura del sumario se materializó en fecha 24/06/2013, mientras que la resolución recurrida ante estos estrados data del 11/06/2018.

En primer lugar, en cuanto a la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, cobra relevancia lo normado en los arts. 803, 804 y 805 inc. “a)” del Código Aduanero.

Que, por su parte, el plazo de vigencia de la potestad del Fisco para percibir tributos regidos por la legislación aduanera es de cinco (5) años a contar desde el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado o, en caso de tributos, que debieran exigirse como consecuencia del incumplimiento de una obligación impuesta como condición del otorgamiento de un beneficio tributario, el primero de enero del año siguiente a la fecha de dicho incumplimiento.

No obstante ello, el art. 805 inc. “a)” establece que la prescripción se suspende “(...) *desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión (...)*”.

En este orden de ideas, el plazo prescriptivo empezó a correr el 01/01/2009. Asimismo, en fecha 24/06/2013, se instruyó el pertinente sumario contencioso en los términos del art. 1090, inc. “c)” del C.A., cuyos efectos suspensivos del plazo de prescripción se mantuvieron vigente hasta el dictado de la

Resolución n.º 3785/2018 (DE PRLA) —aquí apelada—, por lo que corresponde rechazar el planteo incoado por la recurrente respecto de la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, sin costas.

**VII.**— Que, en cuanto a las costas del proceso, en virtud del contexto fáctico analizado y dado que no existen en el *casus* circunstancias que me conminen a apartarme del principio general de la derrota, considero que las mismas deben ser impuestas al Fisco.

**VIII.**— Que, por la forma en que se resuelve el presente caso, no corresponde tratar los demás agravios vertidos por la recurrente.

Por ello, **VOTO POR:**

1. Declarar la nulidad de la Resolución n.º 3785/2018 (DE PRLA), recaída en el expediente administrativo SIGEA n.º 12197-3448-2011, con relación a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.
2. Rechazar el planteo realizado por la actora en cuanto a la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, conforme los fundamentos expuestos en el Considerando VI, sin costas.
3. Imponer las costas a la demandada vencida, conforme con los fundamentos expuestos en el Considerando VII del presente voto.

Así lo voto.—

**El Dr. Garbarino dijo:**

**I.**— Que, adhiero, en lo sustancial, a lo decidido en los Ptos. 1) —solamente en cuanto declara la nulidad de la Resolución DE PRLA Nro.º 3785/2018, apelada en autos— pero la presente adhesión se encuentra limitada al artículo 2º- y 3) de la parte resolutive del voto que antecede, con expresa exclusión de lo resuelto en el Pto. 2), por las razones que a continuación se esbozan, como así también respecto a lo manifestado en el tercer párrafo del Considerando V.-, en virtud de la inalterada jurisprudencia de la Vocalía de la 16º Nominación en la materia; máxime cuando al archivo del trámite de la presunta infracción al artículo 970 del Código Aduanero, dispuesto por el servicio aduanero en los términos de la Instrucción General Nro. 11/2016 (DGA), no ha sido materia de agravio y lo resuelto en tal sentido por la Administración no causa ningún perjuicio a la interesada.

**II.**— Que, bajo tales premisas, y habida cuenta que la resolución apelada en la litis fue dictada el 11 de junio de 2018 y notificada recién el 22 de noviembre del año 2022, los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva encuentran adecuada respuesta en el voto emitido por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN-MERISANT ARGENTINA S.R.L.” del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.

**III.—** Que, en efecto, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de 5 años que prescribe el artículo 803 del Código Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2009, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 24 de noviembre de 2008), debiendo haber fenecido el 1/1/2014, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.

Por otra parte, desde el 24 de junio de 2013 en que se dispuso la apertura del sumario —es decir, ya transcurridos 4 años, 5 meses y 24 días—, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió “hasta que recayere decisión que habilite el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).

**IV.—** Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción surgen del artículo 805, inciso a) del Código Aduanero —norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ DGA s/ RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. Nro. 30.630-A) del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros— deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “AERO VIP S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI” (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ DGA s/ APELACIÓN (Expte. n° 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 —voto del Dr. Garbarino—) y “Carossio Vairiolatti & Cía. S.R.L. c/ DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.

**V.—** Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que, si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (24/6/2013) hasta el dictado de la resolución en crisis —fecha el 11 de junio de 2018— el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del Código Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el 22 de noviembre de 2022, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido.

**VI.—** Que, en efecto, toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende de modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415.

En tal sentido, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo dispone que “Las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias

administrativas”.

Por ello, la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (conf. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a) del Código Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.

**VII.—** Que, por lo demás, y sin perjuicio del modo en que se decide la excepción bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero en marras, en el cual la resolución apelada ha sido notificada el día 22/11/2022, es decir, más de catorce (14) años después de la presunta comisión de la infracción imputada en los términos del artículo 970 del Código Aduanero, correspondiente a la DIT cuyo vencimiento operó en fecha 24/11/2008.

Por ende, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas; siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios meses, años, lustros, decenios, etc.) una resolución suscripta antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre, en cuanto a los derechos de los administrados.

En efecto, bajo los parámetros expuestos cabe colegir que no existe en nuestro ordenamiento jurídico norma ni razón alguna que autorice al Fisco Nacional a notificar una resolución administrativa casi 4 años y 5 meses después de su dictado, en tanto dicho proceder resulta manifiestamente irracional y no puede ser cubierto con ningún argumento formal, pues el principio republicano (art. 1 de la Constitución Nacional) prohíbe la irracionalidad de los actos de gobierno.

**VIII.—** Que, en consecuencia, entiendo que la forma en que propicio que se resuelva es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siempre teniendo en consideración que a los efectos de la interpretación de una norma tributaria aduanera deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).

**IX.—** Que, no obstante, corresponde destacar que aun si se aplicara el criterio que dimana del

Considerando VI. —del voto que antecede— esto es, que los efectos suspensivos del curso de prescripción se mantuvieron vigentes “hasta el dictado de la Resolución n° 3785/2018 (DE PRLA) aquí apelada” (confr. 7mo párrafo), el término legal de prescripción también se encuentra en exceso cumplimentado, toda vez que, habiendo comenzado a correr dicho plazo el 1° de enero de 2009, el Fisco Nacional dispuso la apertura del Sumario el día 24 de junio de diciembre de 2013 —concretamente, a los 4 años, 5 meses y 24 días— y la Resolución aduanera aquí apelada se dictó el 11 de junio de 2018. Por ende, el servicio aduanero sólo contaba —bajo tal hipótesis— con 6 meses y 6 días para proseguir con la tramitación administrativa, siendo que la correspondiente notificación a la firma interesada recién se produjo el 22 de noviembre de 2022, es decir, 3 años, 10 meses y 22 días después de haber operado el término legal de prescripción, constituyendo un extremo fáctico, de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la Litis (vide tercer y cuarto agravio del líbello inicial), cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar.

**X.**— Que, ello es así, en virtud de que las normas específicas que rigen toda cuestión litigiosa deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813).

Y si bien resulta cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).

En tales condiciones, cualquier metodología interpretativa que valide, consienta, acepte, ratifique o permita, de modo activo u omisivo, que la notificación de una resolución aduanera pueda realizarse casi 4 (cuatro) años después de su dictado, sin ningún tipo de consecuencia prescriptiva, resulta contraria a un sano entendimiento del derecho.

En efecto, tomar la letra de la ley y sostener en base a ella el *dura lex sed lex* o el *fiat justitia, pereat mundus*, cuando es poco dudoso que eso sea justicia, se respondía otona con el *summum jus summa injuria* o el *summum jus summa malitia* y era posible seguir con la contraposición de máximas y acabar reduciendo el derecho a un *art pour l'art* poco edificante y escasamente compatible con un estado constitucional de derecho (confr. doctrina de Fallos: 330:4749, voto del Dr. Zaffaroni).

Por último, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión —**SUBLIME**— de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros).

Que, por ello, **VOTO POR:**

1. Declarar la nulidad del art. 2° de la Resolución n.° 3785/2018 (DE PRLA), suscripta en fecha 11 de junio de 2018 y notificada en fecha 22 de noviembre de 2022, recaída en el expediente SIGEA n.°



12197-3448-2011;

2. Declarar la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos con relación a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS en las presentes actuaciones. Con costas a la DGA.

ASÍ LO VOTO.-

**El Dr. Soria dijo:**

Que adhiero, en lo sustancial, al voto del Dr. González Palazzo.

En virtud del acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

- 1. Declarar la nulidad de la Resolución n.º 3785/2018 (DE PRLA), recaída en el expediente administrativo SIGEA n.º 12197-3448-2011, con relación a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.**
- 2. Rechazar el planteo realizado por la actora en cuanto a la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, conforme los fundamentos expuestos en el Considerando VI del voto del Vocal Preopinante, sin costas.**
- 3. Imponer las costas a la demandada vencida, conforme con los fundamentos expuestos en el Considerando VII del voto del Vocal Preopinante.**

**Regístrese y notifíquese.—**

**Suscriben a la presente los Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Juan M. Soria (en su carácter de Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a Nominación), conf. el art. 52 del RPTFN.**

